



**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**  
**TRIBUNAL SUPERIOR**  
**DISTRITO JUDICIAL DE TUNJA**  
**SALA LABORAL**

**ORDINARIO No. 150013105004202000135-01 (2021-1227)**

**ASUNTO:** APELACIÓN Y CONSULTA SENTENCIA

**DEMANDANTE:** LUZ HELENA SÁNCHEZ RIOS

**DEMANDADOS:** COLPENSIONES y OTROS

**MAGISTRADA PONENTE**  
**FANNY ELIZABETH ROBLES MARTÍNEZ**

Acta No. 027

Tunja, cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-**COLPENSIONES**, ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES **PROTECCIÓN S.A.** y la ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES **PORVENIR S.A.** contra la sentencia del 18 de mayo de 2021, así como el grado de consulta respecto de la misma.

### **ANTECEDENTES**

**LUZ HELENA SÁNCHEZ RIOS** entabla demanda laboral<sup>1</sup> en contra de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES**, **ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES PORVENIR S.A.** y la **ADMINISTRADORA DE PENSIONES PROTECCIÓN S.A.**, para que se declare la ineficacia y/o nulidad del traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. Como consecuencia se trasladen los aportes cotizados y los rendimientos generados en el RAIS a COLPENSIONES y se active su afiliación en el régimen de Prima Media con Prestación Definida.

Como sustento fáctico manifiesta que nació el 13 de agosto de 1965, se afilió el 25 de septiembre de 1989 al ISS, se trasladó a **PROTECCIÓN S.A.**, el 3 de mayo de 1999 y a **PORVENIR S.A.**, el 17 de junio de 2004.

---

1. Archivo 2

Que al momento de firmar los respectivos formularios de vinculación no se le ilustró acerca de las diferencias entre los regímenes pensionales, los beneficios y desventajas de afiliarse a cada uno de ellos. No se le entregó proyección de su mesada pensional en el RAIS, ni comparación con la que podría recibir en el Régimen de Prima Media.

Señala que las AFP del RAIS no cumplieron con el deber de información que les correspondía para poder adoptar una decisión autónoma y consciente respecto a los riesgos de la selección del régimen pensional, ni le informaron que podía retractarse.

Aduce que le indicaron que podía pensionarse a cualquier edad y que tendría una mesada pensional superior que la del Régimen de prima Media con Prestación Definida, pero sin explicarle cómo.

Elevó reclamación administrativa a COLPENSIONES el 1 de noviembre de 2011, sin obtener respuesta.

## **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

**COLPENSIONES<sup>2</sup>**, se opone a que prosperen las pretensiones, por carecer de sustento fáctico y legal.

Aduce que es legal la afiliación al Régimen de Ahorro Individual, teniendo en cuenta que se realizó con plena voluntad de la cotizante, quien por decisión propia solicitó el traslado suscribiendo el formulario de vinculación a la A.F.P PROTECCIÓN S.A en mayo de 1999, sin que se configuraran vicios de consentimiento ni cuando se trasladó a esa AFP, ni posteriormente a PORVENIR S.A a la que actualmente se encuentra vinculada.

De igual forma, se encuentra acreditado que la demandante suscribió los referidos formularios de afiliación de manera libre, espontánea y voluntaria, situación que acredita que no existió la nulidad que en este momento se pretende. Si no estaba conforme con los lineamientos del RAIS, debió afiliarse en el Régimen de Prima Media administrado por COLPENSIONES, pero permaneció en la AFP PROTECCIÓN y posteriormente en PORVENIR S.A, lo que conlleva a presumir que contaba con la información necesaria sobre las condiciones, características, modalidades y desventajas del régimen que gobernaría su futuro derecho pensional, confirmando su voluntad de permanecer en el RAIS, al continuar afiliada al mismo por más de 20 años,

---

<sup>2</sup> Archivo 19

acatando y sometiéndose a las consecuencias del manejo de sus aportes al arbitrio del Régimen de Ahorro Individual y de las AFP referida.

Según el Decreto 692 de 1994, la selección del régimen pensional implica la aceptación de las condiciones propias de este para acceder a las prestaciones, señalando, los requisitos de forma que debe contener el formulario de afiliación, los cuales se encuentran acreditados en este caso, por lo que el acto jurídico de traslado de régimen es válido.

La accionante no solo tenía el deber de conocer la norma de carácter nacional que regula el régimen pensional, sino que adicionalmente tenía deberes como consumidor financiero del Sistema General de Pensiones, y se sustrajo a ellos convalidando su deseo de permanencia en el RAIS, al efectuar periódicamente las cotizaciones, sin presentar solicitud de traslado al Régimen de prima Media, desde mayo de 1999, momento a partir del cual se encuentra válidamente en el RAIS.

Igualmente, está inmersa en la prohibición del traslado porque le faltan menos de 10 años para cumplir el requisito de edad y por lo tanto no es viable su retorno al régimen de prima media. Dicha prohibición tiene como sustento la salvaguarda de los principios que regulan el sistema de seguridad social, tales como el de sostenibilidad del sistema pensional, por cuanto, de accederse a las pretensiones de la demanda, se estaría permitiendo el traslado de una cotizante que ya tiene la edad para adquirir el status de pensionada.

Que el error de derecho no da lugar a la declaración judicial de nulidad del negocio jurídico y la parte debe asumir todas las consecuencias de su celebración.

Alega que, en virtud del principio de la relatividad jurídica, COLPENSIONES es un tercero dentro del presente asunto y los actos jurídicos de traslado de régimen promovidos entre la AFP y la parte accionante tienen efectos inter partes. Independientemente de la decisión, resulta improcedente cualquier condena en detrimento de sus intereses.

Presenta como excepciones de mérito las de falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación, error de derecho no vicia el consentimiento, presunción de legalidad de los actos jurídicos, imposibilidad del traslado, cobro de lo no debido, buena fe de COLPENSIONES, inobservancia del principio constitucional de sostenibilidad financiera del sistema pensional, enriquecimiento sin justa causa, improcedencia de costas e intereses en contra de COLPENSIONES, conmutación pensional, prescripción, prescripción de la acción e innominada.

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROTECCIÓN S.A.**<sup>3</sup>, se opone a la declaratoria de ineficacia, porque el traslado de régimen se sujeta a la presunción de validez pues se hizo de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993. No hizo uso del derecho de retracto.

La información suministrada por PROTECCIÓN S.A. a los afiliados al RAIS se encuentra acorde con las disposiciones legales y la vigilancia y control que sobre ellas ejerce la Superintendencia Financiera de Colombia. Los asesores comerciales encargados de promover las afiliaciones reciben permanentemente capacitación, a fin de garantizar que se brinde una adecuada orientación y asesoría a los potenciales afiliados y están en capacidad de resolver las dudas que puedan presentarse.

Propone como excepciones de fondo las de falta de causa para pedir, inexistencia de la obligación a cargo de PROTECCIÓN S.A., cobro de lo no debido, buena fe y la genérica.

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PORVENIR S.A.**<sup>4</sup>, no contesta la demanda.

### DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Tunja, en audiencia pública del 18 de mayo de 2021 profirió sentencia por la que resolvió:

**“PRIMERO.** Declarar ineficaz el traslado de afiliación en pensiones que realizó LUZ HELENA SÁNCHEZ RIOS, identificada con C.C. No 60310461 del Instituto de los Seguros Sociales hoy Administradora Colombiana de pensiones Colpensiones a la AFP Protección, acorde con lo señalado en la parte motiva de esta decisión.

**SEGUNDO.** Declarar que la AFP Protección S.A. y Porvenir S.A. deben trasladar ante la Administradora Colombiana de pensiones Colpensiones la totalidad de las cotizaciones, aportes, bonos pensionales, intereses, comisiones, sin lugar a descuentos por gastos de administración y seguros previsional a favor de LUZ HELENA SÁNCHEZ RIOS, de tal manera que tenga la totalidad de los aportes como si nunca se hubiese trasladado del RPM.

**TERCERO.** Ordenar a la Administradora Colombiana de pensiones Colpensiones activar la afiliación de LUZ HELENA SÁNCHEZ RIOS teniendo en cuenta las cotizaciones de la fecha inicial de afiliación que lo fue el 25 de setiembre de 1989

**CUARTO,** Condenar a la AFP Protección S.A. y Porvenir S.A. para que en el término de un mes trasladen a la Administradora Colombiana de pensiones Colpensiones las cotizaciones, aportes, bonos pensionales, rendimientos, así como frutos e intereses correspondientes a LUZ HELENA SÁNCHEZ RIOS sin lugar a descuentos por gastos de administración y seguros previsional de tal manera que tengan la totalidad de los aportes como si nunca se hubiesen trasladado del RPM.

**QUINTO.** Se condena en costas a AFP Protección S.A. y Porvenir S.A fijando como agencias en derecho la suma de UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS para cada una de las demandadas como se señala en la parte motiva. Líquidense las costas por secretaria.

<sup>3</sup> Archivo 17

<sup>4</sup> Archivo 31

Sin costas en contra de Colpensiones

**SEXTO.** Se ordena la consulta de esta decisión por mandato del art 69 del CPTSS por cobijar a Colpensiones en caso de no ser apelada."

## **APELACIÓN**

### **PROTECCIÓN S.A.**

*Solicita que se revoque la sentencia y no se le condene a la devolución de ningún concepto por cuanto esos dineros ya fueron trasladados a la AFP PORVENIR, es decir, no están en su poder.*

*Y en lo correspondiente a los gastos de administración y seguro previsional, dichos dineros nunca fueron parte de la cuenta individual de la demandante, pues por mandato legal fueron pagados y descontados a un tercero de buena fe, una aseguradora, para que en caso de que se generara alguna contingencia diferente a la de la vejez (muerte o invalidez) se pudiera pagar la pensión.*

### **COLPENSIONES**

*Solicita revocar la sentencia teniendo en cuenta los argumentos señalados en la contestación de la demanda y los alegatos de conclusión presentados, colocando de presente la sentencia C 086 de 2016, M.P. Jorge Iván Palacio que refiere a la mala fortuna de los fondos privados, de no contar con los medios para demostrar la debida información, pues solo se cuenta con el formulario de afiliación.*

*Aduce que la demandante LUZ HELENA SÁNCHEZ nunca utilizó herramientas para asesorarse sobre su futuro pensional, modalidades, ventajas y desventajas del RAIS y que el silencio por más de 20 años deja entrever la ratificación de permanecer en dicho régimen e implica la aceptación de las condiciones que gobernaban para ese momento su derecho pensional, sin poderse desconocer que los afiliados tienen unos deberes. Igualmente, el contrato es bilateral, por lo que las obligaciones son recíprocas y la ignorancia de la ley no es excusa para alegar la ineficacia del traslado.*

*La demandante está inmersa en la prohibición de traslado conforme a la normatividad de la seguridad social y la sentencia SU 062 de 2010, y en caso de declararse la nulidad del traslado, es necesario que se devuelva la totalidad de las cotizaciones y rendimientos consignados y pagados por la afiliado en su cuenta de ahorro individual, con el fin de no vulnerar el equilibrio y sostenibilidad del sistema general de pensiones, conforme lo ha señalado la jurisprudencia de la CSJ en sentencias SL del 8 de septiembre de 2018, radicado 31989, SL 17595 de 2017, SL 4989 de 2018, SL 1421 de 2019 radicado 56174.*

*Solicita se nieguen todas las pretensiones y se acojan las excepciones planteadas.*

**PORVENIR S.A.**

*Solicita que se revoque la decisión, porque la demandante no precisó el acto que realizó el fondo de pensiones, para soslayar su libre escogencia del régimen de seguridad social en pensiones. Tampoco se acreditaron los supuestos fácticos contemplados en los artículos 1740 a 1745 del Código Civil para declarar la nulidad del contrato, y así darle paso a la aplicación del artículo 1746 del Código Civil y ordenar, únicamente a cargo de su representada, las restituciones mutuas.*

*Manifiesta que la interpretación que se hace del artículo 1746 C.C., debe ir de la mano con los artículos 963 y 964, por cuanto aquí no está discutiendo ningún derecho pensional, sino un acto jurídico de traslado, para determinar si es eficaz o no.*

*En aplicación del artículo 113, literal b de la ley 100 de 1993, únicamente se traslada el saldo de la cuenta y los rendimientos financieros; pero no los gastos de administración porque ellos no sufragan la pensión de vejez en ninguno de los dos regímenes, lo cual supone un enriquecimiento sin causa a favor de Colpensiones. El artículo 20 de la ley 100 del 93 indica, tanto en el RPM como en el RAIS, el 3% de la cotización se destina para financiar los gastos de administración y, de forma expresa, señala que en el RPM el 10,5% del IBL financia la pensión de vejez y la constitución para efecto de las reservas.*

*El decreto 663 no imponía la obligación de dejar prueba de la información que se suministraba a los afiliados; fue en legislaciones posteriores que se impuso el deber de dejar sentado lo relacionado con ese consentimiento informado.*

*Que la CSJ en su Sala Laboral desde septiembre de 2020 ha hablado de las conductas que se deben analizar como actos de relacionamiento, que permiten colegir que una persona tenía vocación de permanecer en el régimen y que contaba con todos los elementos para forjar con plena convicción su dirección y, bajo este entendido, la demandante no solo se trasladó de forma voluntaria y libre sino que posteriormente decidió permanecer en el RAIS cuando realizó un movimiento horizontal a otro fondo de pensiones y, solo después de veinte años, considera que fue omitido el deber de información y que nunca le explicaron ni le dieron información respecto a las características de los dos regímenes.*

## A L E G A T O S

**PARTE DEMANDANTE**, considerando que los fondos demandados no lograron probar haber suministrado a su representada la calidad de información a que hace referencia la Corte Suprema de Justicia. Solicita se confirme la decisión, con las modificaciones que se consideren oportunas en su beneficio.

**AFP PROTECCIÓN S.A.**, reafirma los fundamentos alegados en la impugnación y solicita revocar la sentencia y en su lugar, absolver a esa AFP de la devolución de los dineros referentes a administración y seguro provisional.

**COLPENSIONES** y la **AFP PORVENIR** guardaron silencio.

## C O N S I D E R A C I O N E S

De conformidad con el **principio de consonancia** la Sala aborda como **problema jurídico** determinar si el traslado realizado por la demandante del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al de Ahorro Individual con Solidaridad es ineficaz. Y, en virtud del grado jurisdiccional de CONSULTA previsto en el art. 69 del CPT a favor de COLPENSIONES, determinar si es obligación de la entidad recibir a la demandante junto con todos los valores que PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A., le trasladen, como consecuencia de la ineficacia del traslado de la actora.

El **derecho a la información** se encuentra contemplado en el art. 20 de la Constitución Política e indica que todas las personas tienen derecho a recibir información veraz e imparcial. Así, la Corte Constitucional en sentencia C-488/93 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, señaló:

"El derecho a la información es un derecho que expresa la tendencia natural del hombre hacia el conocimiento. El ser humano está abierto a la aprehensión conceptual del entorno para reflexionar y hacer juicios y raciocinios sobre la realidad. Es en virtud de esta tendencia que a toda persona se le debe la información de la verdad, como exigencia de su ser personal. El sujeto de este derecho es universal: toda persona -sin ninguna distinción- y el objeto de tal derecho es la información veraz e imparcial".

En el presente asunto se pretende la declaratoria de la ineficacia del traslado de régimen pensional porque no obtuvo la demandante la información necesaria para adoptar a conciencia su decisión.

Al efecto se acredita que la señora LUZ HELENA SÁNCHEZ RIOS, nació el 4 de marzo de 1962<sup>5</sup>; estuvo afiliada al ISS desde el 25 de septiembre de 1989<sup>6</sup>, suscribió formulario<sup>7</sup> de traslado de régimen con COLMENA hoy PROTECCIÓN S.A., el 3 de mayo de 1999, y con PORVENIR S.A.,<sup>8</sup> el 17 de junio de 2004.

Entonces, debe mirarse si para el traslado de régimen, la obligación de dar información adecuada y suficiente se cumplió por parte de las AFP, advirtiéndose que la mera suscripción del formulario de traslado de régimen no demuestra su cumplimiento, como se expuso en sentencia con radicado 68838, MP. Clara Cecilia Dueñas Quevedo:

“Para el Tribunal el consentimiento informado no es predicable del acto jurídico de traslado, pues basta la consignación en el formulario de que la afiliación se hizo de manera libre y voluntaria.

La Sala considera desacertada esta tesis, en la medida que la firma del formulario, al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos preimpresos de los fondos de pensiones, tales como «la afiliación se hace libre y voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otro tipo de leyendas de este tipo o aseveraciones, no son suficientes para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, acreditan un consentimiento, pero no informado.

(...)

Por tanto, hoy en el campo de la seguridad social, **existe un verdadero e insoslayable deber de obtener un consentimiento informado (CSJ SL19447-2017), entendido como un procedimiento que garantiza, antes de aceptar un ofrecimiento o un servicio, la comprensión por el usuario de las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen. Vale decir, que el afiliado antes de dar su consentimiento, ha recibido información clara, cierta, comprensible y oportuna.”**

Así, la manifestación referente a la validez del formulario de afiliación no resulta admisible, porque en este asunto no se está debatiendo que la demandante no tuviera capacidad para suscribir el formulario de afiliación, sino que no se le dio la asesoría suficiente para adoptar una determinación informada.

Tampoco es de recibo el planteamiento acerca de que **no se comprometió la libertad de elección de régimen pensional o algún vicio del consentimiento**, pues lo que se debatió fue la ineficacia del traslado de régimen por incumplimiento de la obligación legal de información impuesta a las AFP, que es a las que les corresponde demostrar que acataron la obligación de advertir al demandante, para que con la autonomía y libertad informada, resolviera sobre el traslado, como se deduce del artículo 1604 del C.C. que indica que la demostración de la diligencia y cuidado corresponde a quien ha debido emplearla.

---

<sup>5</sup> Archivo 2

<sup>6</sup> Archivo 19

<sup>7</sup> Archivo 2

<sup>8</sup> Archivo 2



Además que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha proferido varias decisiones en casación, entre otras, las SL 1452 de 2019, SL 1688 de 2019 y SL 1689 de 2019, en las cuales marca las directrices o sub reglas para que se configure la ineficacia del traslado del Régimen de Prima Media con Prestación definida al de Ahorro Individual con Solidaridad, indicando que la consecuencia del ordenamiento jurídico a la afiliación desinformada es la ineficacia, o la exclusión de todo efecto jurídico del acto de traslado.

De la misma manera sobre la **carga de la prueba** la jurisprudencia ha fijado en cabeza de las AFP la obligación de acreditar que cumplieron a cabalidad su deber de informar adecuadamente a quienes deseen afiliarse a ellas, sobre las condiciones de dicho régimen, como puede verse en las sentencias del 9 de septiembre de 2008, radicado 31314, y del 22 de noviembre de 2011, radicado 33083, M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón, primera de las cuales en la que indicó:

“Las administradoras de pensiones lo son de un patrimonio autónomo propiedad de los afiliados, según lo prescribe el artículo 97 de la Ley 100 de 1993; la ley radica en ellas el deber de gestión de los intereses de quienes se vinculen a ellas, y cuyos deberes surgen desde las etapas previas y preparatorias a la formalización de su afiliación a la administradora.

“Es razón de existencia de las Administradoras la necesidad del sistema de actuar mediante instituciones especializadas e idóneas, con conocimientos y experiencia, que resulten confiables a los ciudadanos quienes les van a entregar sus ahorros y sus seguros de previsión para su vejez, su invalidez o para su familia cercana en caso de muerte prematura.

...

“Por lo dicho es que la responsabilidad de las administradoras de pensiones es de carácter profesional, la que le impone el deber de cumplir puntualmente las obligaciones que taxativamente le señalan las normas, en especial las de los artículos 14 y 15 del Decreto 656 de 1994, cumplirlas todas con suma diligencia, con prudencia y pericia, y además todas aquellas que se le integran por fuerza de la naturaleza de las mismas, como lo manda el artículo 1603 del C.C., regla válida para las obligaciones cualquiera que fuere su fuente, legal, reglamentaria o contractual.

...

**“La información debe comprender todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional.**

**“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad.”**

Dejando claro así el deber de información adecuada que tienen las AFP en estos casos. Posteriormente en la sentencia SL12136 del 3 de septiembre de 2014 con ponencia de la misma magistrada, se pronunció sobre la necesidad de que las AFP demuestren el cumplimiento de la carga de brindar adecuada información. Así dijo:

**“A juicio de esta Sala no podría argüirse que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos prestacionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple**

**expresión genérica; de allí que desde el inicio haya correspondido a las Administradoras de Fondos de Pensiones dar cuenta de que documentaron clara y suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar ineficaz ese tránsito. Solo a través de la demostración de la existencia de la libertad informada para el cambio de régimen, es que el juzgador podría avalar su transición;** no se trata de demostrar razones para verificar sobre la anulación por distintas causas fácticas, sino de determinar si hubo eficacia en el traslado, lo que es relevante para entrar a fijar la pérdida o no de la transición normativa. Al juzgador no le debe bastar con advertir que existió un traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad, sino que es menester, para la solución, advertir que la misma es válida, lo cual resulta un presupuesto obvio, máxime cuando esta Sala ha sostenido que el régimen de transición no es una mera expectativa.

...

**Para este tipo de asuntos, se repite, tales asertos no comprenden solo los beneficios que dispense el régimen al que pretende trasladarse, que puede ser cualquiera de los dos (prima media con prestación definida o ahorro individual con solidaridad), sino además el monto de la pensión que en cada uno de ellos se proyecte, la diferencia en el pago de los aportes que allí se realizarían, las implicaciones y la conveniencia o no de la eventual decisión y obviamente la declaración de aceptación de esa situación.** Esas reglas básicas, permiten en caso de controversia estimar si el traslado cumplió los mínimos de transparencia, y de contera, sirven de soporte para considerar si el régimen de transición le continuaba o no siendo aplicable."

*De esta manera, debido al carácter técnico y financiero del asunto, las personas idóneas para otorgar la información son las AFP quienes tienen la carga probatoria de acreditar que brindaron asesoría suficiente y no el afiliado, independientemente de su formación profesional, pues se trata de una obligación a cargo de aquellas.*

*En este orden de ideas, en el asunto sub examine, al alegar la demandante la omisión por falta de información en que incurrieron las AFP, la carga de la prueba fue trasladada a estas administradoras, a las que les correspondía demostrar que la señora SÁNCHEZ RIOS al momento de trasladarse de régimen pensional contaba con toda la información precisa, completa y comprensible según el caso, incluyendo los beneficios y las consecuencias negativas que conllevaba tal acto, de lo cual no se encuentra prueba alguna.*

*Referente al **Decreto 663 de 1993**, en lo que atañe al deber de información por parte de las AFP, cabe precisar que, es claro, que a las AFP del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad les correspondía desde su creación, demostrar que en efecto, le proporcionaron a la demandante información completa, técnica y adecuada, que le permitiera a través de elementos de juicio claros y objetivos, adoptar una decisión informada, como se infiere del artículo 97-1 de la mencionada norma. Sólo el cumplimiento de esas medidas fundamentales, permite deducir que el traslado cumplió con los mínimos de transparencia, y lealtad. Es así como en sentencia SL 1452 del 3 de abril de 2019, MP. Clara Cecilia dueñas Quevedo, se determinó:*

*"En armonía con lo anterior, el Decreto 663 de 1993, «Estatuto Orgánico del Sistema Financiero», aplicable a las AFP desde su creación, prescribió en el numeral 1.º del artículo*

97, la obligación de las entidades de «suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado».

De esta manera, como puede verse, desde su fundación, las sociedades administradoras de fondos de pensiones tenían la obligación de garantizar una afiliación *libre y voluntaria*, mediante la entrega de la información suficiente y transparente que permitiera al afiliado elegir entre las distintas opciones posibles en el mercado, aquella que mejor se ajustara a sus intereses. No se trataba por tanto de una carrera de los promotores de las AFP por capturar a los ciudadanos incautos mediante habilidades y destrezas en el ofrecimiento de los servicios, sin importar las repercusiones colectivas que ello pudiese traer en el futuro. La actividad de explotación económica del servicio de la seguridad social debía estar precedida del respeto debido a las personas e inspirado en los principios de prevalencia del interés general, transparencia y buena fe de quien presta un servicio público.

...

Ahora bien, la información necesaria a la que alude el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero hace referencia a la descripción de las características, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los regímenes pensionales, de modo que el afiliado pueda conocer con exactitud la lógica de los sistemas públicos y privados de pensiones. Por lo tanto, implica un parangón entre las características, ventajas y desventajas objetivas de cada uno de los regímenes vigentes, así como de las consecuencias jurídicas del traslado.

...

Desde este punto de vista, para la Corte es claro que desde su fundación, las administradoras ya se encontraban obligadas a brindar información objetiva, comparada y transparente a los usuarios sobre las características de los dos regímenes pensionales, pues solo así era posible adquirir «un juicio claro y objetivo» de «las mejores opciones del mercado».

Ahora, si bien es cierto que podía hacer uso del **derecho de retracto** o **retornar al régimen de prima media**, también lo es que su inconformidad radica en el hecho de no haberle explicado en el momento del traslado las consecuencias reales de su decisión, es decir, de no haber tenido a su alcance todas las herramientas para decidir a conciencia.

De la misma manera, el hecho de que la actora **no pidiera información** a lo largo de su afiliación a las AFP del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, no soslaya las falencias del deber de información evidenciadas al momento de realizar la afiliación, cuando se surtió el cambio de régimen pensional. Por ende, tampoco tiene incidencia que la actora tuviese la **capacidad de obligarse**, además de que, como lo sostiene la Corte Suprema de Justicia en sentencia, radicado 662987, M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo:

“... la administradora profesional y el afiliado inexperto se encuentran en un plano de desigualdad, que la legislación interna reequilibrar mediante la exigencia de un deber de información y probatorio a cargo de la primera...”

En lo concerniente, al principio de **sostenibilidad financiera del sistema pensional**, el cual se consagró a partir del Acto Legislativo 01 de 2005, la Corte Constitucional C-111-2006. MP Rodrigo Escobar Gil señaló:

“ el derecho a la seguridad social como derecho prestacional requiera, entre otros aspectos, de una estructura básica que permita atenderlo y de una constante asignación de recursos provenientes, en primer lugar, del cálculo actuarial del mismo sistema, a través de tasas de cotización, semanas mínimas de permanencia, períodos de fidelidad, plazos de carencia, cotizaciones voluntarias, rendimientos financieros, etc.; y en segundo término, del subsidio del Estado, quien a través de sus propios recursos fiscales, debe asegurar el acceso de todos los habitantes del territorio colombiano a los derechos irrenunciables de la seguridad social.”

“La seguridad social goza de carácter de fundamental al ser conexo y paralelo a la vida, al trabajo y la salud; este derecho tiene su expreso reconocimiento genérico en el artículo 48 de la Carta, y específicamente para las personas disminuidas físicas, sensoriales y psíquicas en los mandatos 13 y 17 superiores”.

*En este asunto no se evidencia que se vulnere el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, toda vez que los aportes pensionales realizados por la demandante en las AFP, se trasladan en su totalidad y con ello se dispone solventar el derecho pensional adquirido por la actora, con arreglo a la ley.*

*Por otra parte, sobre la condena que el a quo le impuso a la AFP del RAIS de **trasladar a COLPENSIONES las cotizaciones, aportes, bonos pensionales, rendimientos, así como frutos e intereses, sin descuento alguno por gastos de administración**, cabe señalar que la jurisprudencia se ha pronunciado<sup>9</sup> aclarando que el traslado de los aportes realizados por la demandante, junto con sus rendimientos y demás elementos económicos a COLPENSIONES, se debe realizar sin descontar ningún concepto, porque la AFP del RAIS debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado como lo establece el artículo 1746 del C.C., sin deducciones de ningún tipo, esto es, como si la demandante nunca se hubiese trasladado, lo que le garantiza a COLPENSIONES, que las sumas que reciba sean las mismas que hubiere recibido si el afiliado hubiera cotizado en el RPM, lo que impide la descapitalización del fondo común a que aluden los recurrentes.*

*Así mismo, esta sala ha acogido lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL4989 del 14 de noviembre de 2018, M.P. Gerardo Botero Zuluaga, que citó la sentencia CSJ SL17595-2017, que rememoró la sentencia 31989 del 8 de septiembre de 2008, así:*

“Sobre las consecuencias de la nulidad del traslado entre regímenes esta Sala en sentencia SL, del 8 de sep. 2008, rad. 31989, reiterada en varias oportunidades, adoctrinó:[...]

“La administradora tiene el deber de devolver al sistema todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del actor, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado.

<sup>9</sup> Sentencia SL 1421 del 10 de abril de 2019. M.P. Gerardo Botero Zuluaga.

<sup>10</sup> Radicado 150013105003201900189-01 (2020-1303) MP. María Isabel Fonseca González

"Como la nulidad **fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez**, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C." SE RESALTA

*Criterio reiterado en la sentencia SL4360 del 9 de octubre de 2019, M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, al indicar:*

"Por esto mismo, en tratándose de afiliados, la Sala ha adoctrinado que **los fondos privados de pensiones deben trasladar a Colpensiones la totalidad del capital ahorrado, junto con los rendimientos financieros. Así mismo, ha dicho que esta declaración obliga las entidades del régimen de ahorro individual con solidaridad a devolver los gastos de administración y comisiones con cargo a sus propias utilidades, pues desde el nacimiento del acto ineficaz, estos recursos han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones** (CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019 y CSJSL1688-2019)". SE RESALTA

*Lo cual guarda consonancia con lo indicado en la sentencia SL2817 de 2019, que reiteró: "En consecuencia, ante la ineficacia de la afiliación del actor a PROTECCION S. A., PORVENIR S.A. y su retorno al RPMPD, administrado por el ISS hoy COLPENSIONES, la primera AFP deberá "devolver los aportes por pensión, los rendimientos financieros y los gastos de administración." a la segunda, conforme lo ha expuesto la Corte en la sentencia CSJ SL1421-2019, que reiteró la regla de las sentencias CSJ SL17595-2017 y CSJ SL4989-2018, CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989"*

*De esta manera, le corresponde a COLPENSIONES, al momento del traslado de los valores ordenados a PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A., verificar que las sumas que reciba, correspondan a las referidas en precedencia y se ajusten a los precisos mandatos legales y precedentes jurisprudenciales citados.*

*No sobra advertir que la declaratoria de ineficacia del traslado en aplicación del artículo 1746 del C.C. lleva implícita la devolución de todos los saldos que por cualquier concepto hubiesen recibido las AFP por su utilización y durante el tiempo que los tuvieron en su poder, lo que garantiza a la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES que las sumas que reciba son las mismas que hubiera recibido si el afiliado hubiera seguido cotizando en el RPM y que contribuye a la sostenibilidad financiera del sistema.*

*Frente a la **prohibición del artículo 13 de la Ley 100 de 1993**, en este caso no se trata de un traslado sino de la violación del deber de información que afecta la validez del acto jurídico, considerado en sí mismo. Así se afirmó en sentencia de la CSJ, Sala de Casación Laboral, radicado 662987:*

"sin importar si se tiene o no un derecho consolidado, si se tiene o no un beneficio transicional, o si se está próximo a pensionarse, dado que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico en sí mismo..."

En cuanto a la **aplicación del artículo 964 del Código Civil sobre la buena fe del negocio jurídico** alegada por PORVENIR para controvertir la devolución de las sumas recibidas, debe decirse que esos recursos son el soporte financiero de la prestación pensional y su restitución es procedente como consecuencia de la conducta indebida de la administradora, al omitir el cumplimiento de su deber de información, de conformidad con las jurisprudencias citadas en antelación.

Ahora en cuanto a que no resulta procedente dar aplicación al **artículo 271 de la ley 100 de 1993**, cabe precisar que esta norma concuerda con el artículo 13, por lo que resulta válida la interpretación que hace de la misma el a quo, en coherencia con lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 1688-2019.<sup>11</sup>

En lo que atañe a los "ACTOS DE RELACIONAMIENTO" a los que alude PORVENIR S.A, advierte esta Sala que, en efecto, desde la SL 3752-del 15 de septiembre de 2020, una sala laboral de descongestión de la Corte Suprema de Justicia, de manera mayoritaria, luego de reiterar la obligación de las AFP de brindar información adecuada a quienes pretenden afiliarse a ellas, así como la obligación de acreditar el cumplimiento de ese deber, se refiere a la pertinencia de resolver los conflictos acerca de seguridad social sin tanto arraigo a las formalidades o protocolos, y con más apego a la intención real que despliegan los afiliados a través de sus actuaciones, refiriendo algunos ejemplos y abordando el tema así:

"Dichos comportamientos o **actos de relacionamiento**, en los casos de afiliación, pueden verse traducidos en acciones concretas de los afiliados tales como presentar solicitudes de información de saldos, actualización de datos, asignación y cambio de claves, entre otros. Así lo ha establecido esta Corporación en el fallo CSJ SL413-2018, en donde dijo que,

Por esta misma razón, en casos como el presente, donde se discute la materialización del acto jurídico de la afiliación o traslado, es relevante tener en cuenta los aportes al sistema, no como un requisito *ad substantiam actus* de la afiliación, como lo sostuvo el Tribunal, sino como una señal nítida de la voluntad del trabajador cuando existen dudas razonables sobre su genuino deseo de cambiarse de régimen.

Desde luego que, para la tesis que ahora sostiene la Sala, la presencia o no de cotizaciones consistente con el formato de vinculación no es la única expresión de

<sup>11</sup> "De acuerdo con el literal b) del artículo 13 de la citada ley, los trabajadores tienen la opción de elegir «libre y voluntariamente» aquel de los regímenes que mejor le convenga y consulte sus intereses, previniendo que, si esa libertad es obstruida por el empleador, este puede ser objeto de sanciones. Es así como paralelamente el artículo 271 precisa que las personas jurídicas o naturales que impidan o atenten en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del sistema de seguridad social, son susceptibles de multas, sin perjuicio de la ineficacia de la afiliación".

esa voluntad, pueden existir otras, tales como las solicitudes de información de saldos, actualización de datos, asignación y cambio de claves, por mencionar algunos actos de relacionamiento con la entidad que pueden denotar el compromiso serio de pertenecer a ella. Lo importante es que exista correspondencia entre voluntad y acción, es decir, que la realidad sea un reflejo de lo que aparece firmado, de modo tal que no quede duda del deseo del trabajador de pertenecer a un régimen pensional determinado.

**A partir de lo expuesto en precedente, se tiene que los traslados horizontales dentro del Régimen de Ahorro Individual, es decir los cambios entre administradoras de fondos privados de pensiones, reúnen los elementos propios de unos actos de relacionamiento, lo cual permite suponer que el afiliado desea continuar en dicho régimen, aunque bajo la asesoría y beneficios que le pueda proveer otra administradora de pensiones, las cuales compiten entre sí.”** (Negrilla fuera del texto)

*Conforme con lo cual, los traslados horizontales dentro del RAIS son actos de relacionamiento que permiten entender la voluntad del afiliado de permanecer en ese régimen. Sin embargo, en la misma sentencia se precisa que es necesario estudiar cada caso en particular para determinar si las AFP cumplieron la obligación de desvirtuar la asimetría de la información, para que el juzgador tenga a su alcance los medios de convicción que le den certeza sobre la situación particular. Así dijo:*

“Por lo tanto, lo que define que un caso se resuelva declarando o no la nulidad, depende del ejercicio probatorio que hayan hechos las partes dentro del proceso a fin de esclarecer si la persona estaba o no debidamente informada. Ello conlleva a sostener, **que se trata de discusiones eminentemente casuísticas que no pueden convertirse en reglas generales de criterio, sino en consideraciones intrínsecamente atadas a lo que se ponga de manifiesto dentro del litigio.**

**En ese orden de ideas, es dable concluir que, aun cuando no haya certeza de si el afiliado recibió al momento de su traslado toda la información requerida, existen otros mecanismos que permiten colegir que la persona tenía vocación de permanecer en el régimen y que contaba con todos los elementos para forjar con plena convicción su elección.”**

*Y, para el caso concreto, llegó a las siguientes conclusiones:*

“1. La línea de criterio de la Sala ha sido mucho más extensa, en el sentido de buscar que exista simetría de la información, es decir, que la persona cuente con todos los elementos necesarios y suficientes para que, en su caso concreto, tome la decisión que considere más beneficiosa.

Dicho lo anterior, no se busca crear reglas de pensamiento general e inamovible, tales como creer que siempre el Régimen de Prima Media será más favorable para los afiliados en contraposición al de Ahorro Individual, o presumir que siempre hubo engaño por no mediar documentación dentro del expediente que acredite la información suministrada.

En su lugar, **por lo que se propende es porque el juez forje de manera libre su convencimiento a partir de ciertas directrices claras, a saber, que la asesoría prestada por los fondos de pensiones -así sea verbal o escrita-, sea focalizada y dirigida a las condiciones particulares de cada uno de los afiliados.**

No se trata solo de elaborar un discurso abstracto que explique en que consiste uno y otro régimen, sino que, por el contrario, contenga las implicaciones concretas (por ejemplo, mediante proyecciones), de lo que sería la causación de su derecho pensional en uno u otro escenario.

Se recuerda que la importancia del derecho a la seguridad social amerita a que, por un lado, **las administradoras de pensiones en su rol de conocedoras del funcionamiento del Sistema contribuyan de manera directa a la decisión de las personas y, finalmente, a que aconsejen bajo parámetros legales sin que estén de por medio intereses de ningún otro tipo.**

...

**Se insiste, tales comportamientos tácitos de la accionante no conducen a entender que hubiera existido una perpetuidad en la asimetría de la información, sino que, por el contrario, un objetivo claro de continuar en este Régimen, asumiendo los beneficios y consecuencias que su decisión traía consigo.”**

*Tesis que ha reiterado en las sentencias SL 1061-2021 de 22 de febrero y SL 2753-2021 de 15 de junio<sup>12</sup>. No obstante, la misma sala, en la sentencia SL1004-2021 de 1º de marzo, advirtió que la reasesoría no subsana la falta de información y que el traslado al interior del RAIS no demuestra deseo de permanecer allí, por lo que cada caso debe ser resuelto de conformidad con lo que aparezca acreditado. Textualmente se advierte:*

**“Al efecto se recuerda, que la Sala en diferentes pronunciamientos ha señalado que la falta de información no se subsana con los traslados que con posterioridad hagan los afiliados en ahorro individual,** tal como se aprecia en las sentencias CSJ SL, 9 septiembre de 2008, radicación 31989; reiterada en la sentencia del 22 noviembre de 2011, radicación 33083, cuyo texto señala lo siguiente:

“La doctrina ha bien elaborado un conjunto de obligaciones especiales, con específica vigencia para todas aquellas entidades cuya esencia es la gestión fiduciaria, como la de las administradoras de pensiones, que emanan de la buena fe, como el de la transparencia, vigilancia, y el deber de información.

“La información debe comprender todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional.

**“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad.**

“Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el *sub lite*, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.

“Bajo estos parámetros es evidente que el engaño que protesta el actor tiene su fuente en la falta al deber de información en que incurrió la administradora; en asunto neurálgico, como era el cambio de régimen de pensiones, de quien ya había alcanzado el derecho a una pensión en el sistema de prima media, su obligación era la de anteponer a su interés propio de ganar un afiliado, la clara inconveniencia de postergar el derecho por más de cinco años, bajo la advertencia de que el provecho de la pensión a los sesenta años, era solo a costa de disminuir el valor del bono pensional, castigado por su venta anticipada a la fecha de redención.

<sup>12</sup> Si bien en la SL 2439-2021 de 15 de junio sostuvo la misma tesis, lo hizo de manera complementaria luego de advertir que “El ad quem concluyó que tal deber fue satisfecho por la demandada, además de que en el presente caso resulta importante resaltar que se presentaron los denominados «actos de relacionamiento»,



[...]

“No desdice la anterior conclusión, lo asentado en la solicitud de vinculación a la Administradora de Pensiones que aparece firmada por el demandante, que su traslado al régimen de ahorro individual se dio de manera voluntaria, que “se realizó de forma libre, espontánea y sin presiones”, pues lo que se echa de menos es la falta de información veraz y suficiente, de que esa decisión no tiene tal carácter si se adopta sin el pleno conocimiento de lo que ella entraña.

**“Se ha de señalar que la actuación viciada de traslado del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual, no se convalida por los traslados de administradoras dentro de este último régimen; ciertamente, la decisión de escoger entre una y otra administradora de ahorro individual, no implica la ratificación de la decisión de cambio de régimen que conlleva modificar sensiblemente el contenido de los derechos prestacionales”** (subraya la Sala).

Con base en lo anterior, se equivocó el Tribunal al afirmar que, con el traslado de Protección S.A. a Colfondos S.A., era claro el deseo del señor Beltrán Giraldo de seguir en el Régimen de Ahorro Individual, pues conforme a la jurisprudencia anteriormente citada, **en manera alguna puede aceptarse que el cambio de entidad subsane la nulidad del traslado, producto de la falta de información veraz y suficiente por parte de Protección S.A.**

**Si bien esta Sala ha sostenido en otras oportunidades que, con base en los actos de relacionamiento no se decreta la nulidad de traslado de régimen cuando se evidencian diversos cambios horizontales de administradora no sobra recordar que también se ha advertido que estas discusiones tienen un componente casuístico tanto de los elementos particulares de la situación en discusión como de los fundamentos de los jueces de instancia (CSJ SL4934-2020 y SL3752-2020).”** (Negrilla de esta sala)

*Del análisis conjunto de la jurisprudencia sobre el tema queda claro que, en todo caso, lo que la Corte ha expuesto es la necesidad de que aparezca que se brindó una información suficiente para romper la desvirtuada la “asimetría” que existe entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad, para lo cual ha de estudiarse caso por caso, sin que se pueda concluir, de manera general, que el traslado entre administradoras al interior del RAIS o la permanencia en éste por prolongado tiempo, muestran que se rompió ese desequilibrio.*

*Para realizar ese estudio en el presente caso, debe partirse de lo que reiterada y pacíficamente, ha señalado la jurisprudencia acerca de las características de la información que debe brindarse a quienes pretenden trasladar de régimen, señalando que debe ser completa, suficiente, clara, lo que implica, en los términos de la referida SL.1004, no solamente la proyección del valor de la pensión sino también lo referente al haber patrimonial de los aportes, los excedentes de libre disponibilidad, la edad de la pensión, el número de semanas necesarias, las consecuencias del no cumplimiento de los requisitos y el destino de los aportes cuando el afiliado fallece y no hay beneficiarios, aspectos que, en el presente caso, no se vislumbra que hayan sido informados a la demandante ni en el acto de traslado de régimen ni, posteriormente, al trasladarse internamente en el RAIS.*

Tampoco puede acogerse la tesis de que no se puede **exonerar al afiliado de la responsabilidad** de informarse suficientemente para adoptar su decisión de traslado de régimen, siendo que esta Sala acoge la posición mayoritaria de la jurisprudencia desarrollada por la Corte Suprema de Justicia- Sala Laboral, en el entendido que la AFP, debido al carácter técnico y económico del asunto, es la encargada de brindar información suficiente a sus afiliados y el incumplimiento de este da lugar a la declaratoria de ineficacia de la afiliación.

Cabe advertir que, aunque en este proceso los actos de relacionamiento no conllevan a concluir que la demandante tuvo la información necesaria para validar el traslado, ello no implica que, en otros casos, ante pruebas diferentes, igualmente la decisión que se adopte sea distinta. Pues como se indica en la sentencia referenciada, será en cada litigio donde se determine lo pertinente de conformidad con la prueba aportada.

Respecto a la excepción de **prescripción** propuesta, ha de decirse que no hay lugar a declarar su prosperidad pues aquí se trata de la declaración de una situación de hecho y no de un derecho, aunque si está encaminada a lograr a futuro la consolidación de uno que es imprescriptible, en los términos explicados en la sentencia SL1689 de 2019, reiterado en la SL 4811 de 2020.

De conformidad con lo expuesto se confirmará la decisión de primera instancia.

Costas en esta instancia cargo de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES**, la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.**, y la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.** de conformidad con lo dispuesto en el artículo 365 del CGP, atendiendo que el recurso no prosperó y hubo oposición.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TUNJA, SALA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

## **R E S U E L V E**

**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia consultada y apelada, teniendo en cuenta las precisiones que sobre las restituciones a cargo de las AFP, se hicieron en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO:** Costas en esta instancia cargo de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES**, la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.** y la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**

**TERCERO:** Oportunamente, por Secretaría devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

**NOTIFIQUESE Y CUMPLASE**

**FANNY ELIZABETH ROBLES MARTÍNEZ**  
**MAGISTRADA**

**MARIA ISBELIA FONSECA GONZÁLEZ**  
**MAGISTRADA**

**JULIO ENRIQUE MOGOLLÓN GONZÁLEZ**  
**MAGISTRADO.**

**Auto:** En cumplimiento a lo dispuesto por la Sala en providencia que antecede, la magistrada ponente fija como agencias en derecho de esta instancia la suma de 1 SMLMV a cargo de cada una de las demandadas, esto es, **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES**, la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.** y la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**

**FANNY ELIZABETH ROBLES MARTINEZ**  
**MAGISTRADA PONENTE**

Firmado Por:

Fanny Elizabeth Robles Martinez  
Magistrada  
Sala 003 Laboral

**Tribunal Superior De Tunja**

**Julio Enrique Mogollon Gonzalez**

**Magistrado**

**Sala 002 Laboral**

**Tribunal Superior De Tunja**

**Maria Isbelia Fonseca Gonzalez**

**Magistrada**

**Sala 001 Laboral**

**Tribunal Superior De Tunja**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **a9914d4d596b26ebe62ff06af4af5fa0c991970bc5df406cfccb65975406259d**

Documento generado en 05/08/2021 12:20:35 p. m.